

Washington sube la presión, Morena depura candidaturas y el IMSS enfrenta la prueba después del Mundial

México atraviesa una jornada donde seguridad, política y empleo formal se cruzan en un mismo punto: la capacidad del Estado para responder con evidencia y no únicamente con discursos. El Gobierno rechazó las acusaciones de la DEA sobre supuestos vínculos entre autoridades y cárteles; Estados Unidos elevó al Cártel de Juárez y a Los Viagras a la categoría de organizaciones terroristas; Morena comenzó a revisar a sus aspirantes rumbo a 2027; y el IMSS enfrenta el reto de convertir el crecimiento de afiliaciones en empleos estables una vez concluido el Mundial.

La presión de Estados Unidos sobre México entró en una nueva etapa. El director de la DEA, Terrance Cole, afirmó que existe una conexión entre las redes criminales y autoridades mexicanas, una declaración que por su gravedad exigía pruebas, nombres y expedientes concretos. Nada de eso fue presentado públicamente. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que el señalamiento carece de fundamento, tiene una motivación política y resulta especialmente cuestionable cuando la propia agencia estadounidense enfrenta antecedentes de corrupción y relaciones impropias entre algunos de sus integrantes y abogados vinculados con narcotraficantes.

La mandataria también dirigió la discusión hacia el interior de Estados Unidos: quién distribuye las drogas, cómo llegan al consumidor y dónde se lava el dinero generado por el mercado ilícito más grande del mundo. El planteamiento no niega la existencia ni la capacidad de los cárteles mexicanos, pero exige una lectura bilateral del problema. No puede combatirse la oferta sin revisar la demanda, ni perseguirse el tráfico sin seguir el flujo de armas y recursos financieros que sostienen a las organizaciones criminales.

La respuesta mexicana coincidió con una decisión más concreta del Departamento del Tesoro: la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y globales. La medida congela activos, bloquea operaciones y expone a sanciones a quienes les proporcionen recursos, servicios o apoyo material. A diferencia de la declaración general del director de la DEA, esta decisión tiene efectos jurídicos y financieros inmediatos.

El mensaje de Washington es claro: la estrategia contra los grupos criminales mexicanos será tratada cada vez más como un asunto de seguridad nacional estadounidense. Para México, el reto consiste en cooperar contra organizaciones violentas sin permitir operaciones unilaterales ni aceptar acusaciones contra sus instituciones sin evidencia verificable.

Ese equilibrio será difícil de sostener porque el conflicto ya ingresó al terreno electoral. Morena presenta los dichos de la DEA como una agresión política y una falta de respeto a la soberanía; la oposición los utiliza para reforzar su narrativa sobre presuntos vínculos del oficialismo con el crimen organizado. En medio de ambas posiciones existe un riesgo evidente: que acusaciones de enorme gravedad terminen administrándose como consignas de campaña.

El Gobierno mexicano ha señalado que actuará cuando existan pruebas suficientes. El embajador en Estados Unidos sostuvo que no habrá protección política, pero tampoco detenciones arbitrarias. Esa debe ser la ruta: los expedientes se investigan, las pruebas se valoran y las responsabilidades se determinan individualmente. La soberanía no puede convertirse en refugio para la impunidad, pero tampoco en una palabra vacía frente a intervenciones extranjeras.

Mientras la relación bilateral se tensa, Morena comenzó a depurar su proceso interno rumbo a 2027. La dirigencia recordó que presentar una solicitud de registro no significa haber sido aceptado como aspirante ni mucho menos obtener una candidatura. Antes de las encuestas vendrá la revisión documental y, previsiblemente, la evaluación política de cada perfil.

La medida es necesaria porque el partido enfrenta un problema derivado de su propia fortaleza. Morena tiene numerosos aspirantes en entidades donde conserva una posición electoral dominante. Para cada candidatura disponible existen varios grupos, estructuras y liderazgos convencidos de que cuentan con mejores condiciones para competir.

El filtro puede ayudar a retirar perfiles vulnerables, pero deberá aplicarse con reglas claras. Una exclusión mal explicada puede convertirse en ruptura; una candidatura cuestionada puede contaminar todo el proceso electoral. Morena necesita verificar antecedentes, conflictos de interés, capacidad territorial y riesgos reputacionales antes de permitir que los aspirantes lleguen a la encuesta.

El tablero de Chihuahua comienza a mostrar lo que puede ocurrir en otros estados. Somos México perfila a Julián LeBarón como posible candidato a gobernador, una apuesta por un perfil ciudadano conocido por su activismo frente a la violencia. Su nombre puede generar atención y conectar con sectores alejados de los partidos tradicionales, pero la elección exigirá estructura, representantes, candidatos municipales y operación territorial. La política no se gana solamente con reconocimiento; se gana convirtiendo ese reconocimiento en organización.

Baja California presenta otro tipo de conflicto. La gobernadora Marina del Pilar Ávila y el exgobernador Jaime Bonilla intercambian acusaciones por la difusión de audios grabados

durante una reunión con supuestos intermediarios estadounidenses. Ávila afirma que fue engañada y que Bonilla organizó el encuentro para atacarla políticamente; el exmandatario sostiene que la gobernadora enfrenta una crisis por sus propias decisiones. Las versiones deberán contrastarse con el contenido completo de las grabaciones y con cualquier investigación formal que se inicie.

El choque también puede afectar la relación entre Morena y el PT. Las coaliciones nacionales suelen presentarse como bloques uniformes, pero en los estados funcionan mediante equilibrios locales, intereses y liderazgos propios. Baja California confirma que la alianza federal no elimina las disputas territoriales.

En el ámbito sindical, la jornada muestra una transformación menos ruidosa, pero políticamente relevante. Pedro Haces, dirigente de CATEM y diputado federal, participó ante Naciones Unidas para plantear una agenda relacionada con ciudades inclusivas, parlamentos y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La intervención confirma que las nuevas centrales sindicales buscan ampliar su presencia más allá de las fábricas, los contratos colectivos y las revisiones salariales.

La proyección internacional puede fortalecer la capacidad de negociación sindical, pero también obliga a demostrar resultados frente a las bases. El valor de una representación gremial no se mide únicamente por el acceso a foros políticos, sino por su capacidad para mejorar salarios, condiciones de trabajo, seguridad social y participación democrática.

CATEM ocupa una posición privilegiada por su cercanía con el bloque gobernante y la presencia legislativa de su dirigente. Esa cercanía puede abrir puertas, aunque también representa un riesgo de dependencia política. El sindicalismo pierde fuerza cuando deja de representar trabajadores y comienza a funcionar solamente como estructura de movilización o respaldo electoral.

El terreno laboral también envía señales desde la economía. El consumo privado mantiene crecimiento, pero pierde velocidad. El INEGI estima avances anuales de 2.8% en mayo y 2.6% en junio, sostenidos por salarios reales, remesas y niveles bajos de desempleo. Sin embargo, otros indicadores muestran cautela entre los hogares y un impacto limitado del Mundial sobre el gasto.

El torneo generó movimiento en entretenimiento y algunas ciudades, pero no produjo el impulso generalizado que se esperaba. El consumo medido por BBVA cayó en junio; el gasto en hoteles y restaurantes retrocedió, mientras las compras digitales siguieron creciendo. El sector aéreo también tuvo resultados mixtos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México movilizó menos pasajeros que el año anterior.

Para el IMSS, esta información tiene una lectura directa. El Instituto mantiene un registro superior a 22.7 millones de personas aseguradas, pero una parte relevante del crecimiento reciente proviene de la incorporación de trabajadores de plataformas digitales. La formalización es positiva porque amplía derechos, aunque no debe confundirse con la generación de nuevos puestos de trabajo.

El verdadero examen comenzará después del Mundial. Las contrataciones temporales pueden desaparecer, los empleos vinculados al turismo pueden ajustarse y algunas altas pueden convertirse rápidamente en bajas. La cifra importante no será cuántas personas aparecieron en el registro durante junio, sino cuántas continúan aseguradas durante el segundo semestre, con salarios correctamente reportados y acceso efectivo a las prestaciones.

Una afiliación de pocas semanas mejora la estadística. Una relación laboral estable fortalece al Seguro Social.

El IMSS necesita observar la permanencia de los trabajadores de plataformas, la regularidad de las aportaciones y el salario base de cotización. También debe combatir esquemas en los que las empresas registran ingresos inferiores a los realmente percibidos, porque esa práctica reduce la recaudación institucional y afecta las futuras pensiones e incapacidades de los trabajadores.

La fotografía nacional tiene un hilo conductor. Estados Unidos presiona a México para obtener mayor control sobre organizaciones criminales; Morena revisa sus candidaturas para evitar problemas antes de 2027; los dirigentes sindicales buscan ampliar su influencia política; y el IMSS intenta convertir una formalización coyuntural en estabilidad contributiva.

Todos estos asuntos exigen lo mismo: instituciones capaces de verificar antes de reaccionar.

La DEA debe presentar pruebas si acusa a autoridades mexicanas. Morena debe revisar expedientes antes de respaldar candidaturas. Los sindicatos deben acreditar resultados antes de presumir influencia. Y el IMSS debe comprobar permanencia antes de interpretar cada alta como un empleo consolidado.

Porque en política pública, las cifras pueden abrir una narrativa, pero sólo los resultados sostienen la confianza.